

T.O.F. PARANÁ - L. de E. N°: 1.960/10, 1.991/10 y 2138/11 - **“HARGUINDEGUY, ALBANO EDUARDO Y OTROS S/INF. ART. 151 Y OTROS DEL C. PENAL”, “DIAZ BESSONE, RAMÓN GENARO Y OTROS S/ INF. ART. 141 Y OTROS DEL C. PENAL” y “VALENTINO, JUAN MIGUEL Y OTROS S/ INF. ART. 141 Y OTROS DEL C. PENAL”**

Poder Judicial de la Nación

Rusia, en la que se denunciaron las masacres de los armenios por parte del imperio Otomano como “crímenes de lesa humanidad y civilización por lo que todos los miembros del gobierno turco serán hallados responsables junto con sus agentes implicados en la masacre.”(Cft. Lorenzetti y Kraut, “Derechos humanos: justicia y reparación”, Editorial Sudamericana, pág. 24)

A partir de esos mojones, ocurrido el genocidio judío la comunidad internacional reclamó declaraciones formales. Así el art. 6 c) del Estatuto del Tribunal Internacional Militar de Nuremberg, del 8 de agosto de 1945, consagra formalmente como crímenes de lesa humanidad “el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos, cometidos en contra de cualquier población civil, antes o durante la guerra, o las persecuciones por motivos raciales o religiosos, en la ejecución o en concepción con un crimen dentro de la jurisdicción del tribunal”. El Estatuto fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 de diciembre de 1946, como principios del derecho internacional. Además este concepto ha sido ratificado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 3 de agosto de 1994, en Burundi. Más adelante, la comunidad internacional dictó, en el año 1998, el Estatuto de Roma (ratificado por Argentina el 16/1/01 mediante ley 25.390, que recibiera implementación mediante ley 26.200, el 9/1/2007). Este ordenamiento define en su art. 7 la esencia del crimen contra la humanidad “... cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de una ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque...”; estableciendo los órganos de juzgamiento.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Paniagua Morales y otros versus Guatemala”, resuelto mediante sentencia del 8/3/1998 precisó el alcance de crímenes que violaban expresamente C.A.D.H., en consonancia con el Estatuto de Roma y con las declaraciones de numerosos órganos internacionales que han velado por el respeto a los derechos del individuo, como son la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Preámbulo de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Este contexto jurídico permitió establecer definitivamente que “todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana y es condenada como una negación de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, como una

USO OFICIAL